

crisis nacional y política económica*

ROLANDO CORDERA C.

I

El objeto de estas notas es presentar, de manera preliminar, las contradicciones económicas básicas que en el presente —y para el futuro previsible— determinan la *necesidad* de diseñar y poner en práctica una política económica de nuevo tipo por parte del Estado mexicano.

En los últimos años, esta necesidad ha dejado de pertenecer al almacén especulativo de grupos reducidos de economistas preocupados por el largo plazo para, de hecho, situarse en el centro de la discusión que, aunque precaria, tiene lugar en el país sobre la “cosa pública”. Podría decirse incluso que en la base de las poco usuales escaramuzas “en la cúspide” que han caracterizado a la escena política nacional en los tres años de la presente administración federal, ha estado el hecho de que las intenciones, declaraciones y, en menor medida, acciones del actual régimen han estado presididas por la “necesidad del cambio”.¹

Conviene advertir, sin embargo, que ni la existencia de contradicciones objetivas que determinan la existencia de la necesidad aludida ni la conciencia que de esta última puedan tener los gobernantes en turno, ni siquiera el que dicha conciencia haya sido “socializada” extensivamente, aseguran que la mencionada nueva política vaya a diseñarse en efecto ni, mucho menos, que una vez diseñada dicha política pueda instrumentarse y alcanzar los resultados originalmente esperados. Ello depende, entre otras cosas, del marco general de relaciones políticas e inclinaciones ideológicas que privan

* Una versión aún más preliminar de estas notas fue expuesta en el ciclo sobre la economía mexicana en 1973, realizado en la FCPS.

¹ Véase: Grupo de Análisis Político, “El Movimiento Estudiantil Mexicano ante su Crisis”, (mimeografiado), México, junio, 1971 y *Punto Crítico*, núm. 1, México, enero, 1972.

en el momento en que el “problema” asciende al campo de las decisiones públicas y, desde luego, de los efectos que sobre dicho marco pudiera tener, no digamos la aplicación de la nueva política, sino incluso el anuncio de que un cambio más o menos importante se ha hecho necesario. Tales parecen ser, de paso, las coordenadas dentro de las cuales se ha movido la intención “revisionista” del nuevo régimen.

Por otro lado, la dinámica de las contradicciones a que nos referiremos en este trabajo, sí parece estar en condiciones de generar, a corto plazo, desajustes crecientes en el nivel de los precios internos, en el proceso ahorro-inversión y la balanza de pagos que, al combinarse, ponen en peligro el crecimiento de la producción global y la estabilidad misma del proceso de desarrollo. Tales parecen ser, también, las coordenadas dentro de las cuales se ha desenvuelto la economía mexicana en los últimos años.

Las dificultades que el espíritu de cambio del nuevo gobierno ha tenido para concretarse en un cuerpo coherente de política económica, aunadas a la inestabilidad manifiesta del proceso económico a partir de 1971, han sido interpretadas por algunos círculos de opinión —identificados con lo que *a grosso modo* podríamos llamar la “derecha empresarial”— como un producto de la ineficiencia e incongruencia gubernamentales, fruto estas últimas, a su vez, de escondidas intenciones “estatizantes” de algunos altos funcionarios públicos. Por su parte, algunos sectores de la oposición de izquierda tienden a interpretar la presente coyuntura como el prolegómeno inmediato —y fatal— de una inminente crisis catastrófica (o casi), frente a la cual las clases dominantes y el Estado carecerían de alternativa viable alguna.

Estas notas se ubican en una posición distinta de las aludidas arriba. Ciertamente, no se desconoce la pre-

sencia generalizada del factor ineficiencia al nivel de la administración pública ni, desde luego, la existencia de contradicciones económicas y políticas que en su desarrollo podría desencadenar, en un plazo más o menos corto, una crisis que afectara al conjunto de la sociedad mexicana. Sin embargo, respecto a lo primero, es preciso reconocer que las dificultades económicas y políticas del presente trascienden el marco estrecho de las habilidades o torpezas técnicas y administrativas del actual equipo gobernante y que más bien constituyen la explicitación del deterioro de un estilo de crecimiento que alcanzó su momento cumbre en la etapa llamada del “desarrollo estabilizador”. Por lo que toca a la segunda cuestión, en todo caso lo que habría que tener en mente es que precisamente lo que está en juego ahora es la aplicación por parte del Estado de una alternativa política y económica tendiente, *de manera explícita*, a encarar la actual coyuntura y posponer, o “dinamizar”, la mencionada crisis global. En este sentido, lo que cabría explorar es la medida en que dicha alternativa es adecuada a las dimensiones de la crisis; los elementos que determinarían su viabilidad; las contradicciones que se derivarían de su eventual puesta en marcha, etcétera.

Sobre esto último, es necesario aclarar que estas notas dejan de lado la discusión sobre el elemento “viabilidad”, y se centran, como se dijo al principio, en un momento anterior del proceso: la identificación de las contradicciones y mecanismos *objetivos* que hacen *necesaria*, en términos de la dinámica del propio sistema, una revisión del estilo de crecimiento seguido por México hasta 1970.

II

Como la experiencia lo ha evidenciado de manera prácticamente absoluta, en todos aquellos países capitalistas que iniciaron su crecimiento industrial en los últimos treinta o cuarenta años, el proceso de acumulación de capital se ha visto estrechamente condicionado por la dinámica específica de los llamados sectores “externo” y “público” de la economía los que, de hecho, han constituido el “pivote estratégico” del conjunto del desarrollo capitalista y de sus coyunturas concretas.

En efecto, la constitución de un sistema de explotación capitalista más o menos generalizado, con su estructura de clases, su Estado, su mercado de trabajo, etcétera, para traducirse en un proceso de expansión

requiere, en estos países, de una vinculación bien definida y permanente con el mercado mundial, gracias a la cual pueda *concretarse* en términos nacionales la reproducción ampliada del capital en la industria.

El escaso grado de desarrollo de las fuerzas productivas en estas naciones en el momento de su “despegue” industrial, impone barreras prácticamente infranqueables al desarrollo adecuado y en el corto plazo del sector productor de bienes de capital, al menos desde el punto de vista dominado por el criterio de rentabilidad capitalista. Por lo demás, la existencia de un aparato industrial ya desarrollado en otras economías, en las que se produce en condiciones superiores en materia de productividad y costos, determina como “antieconómica”—de nuevo de acuerdo con el criterio de rentabilidad capitalista— la producción de una amplia gama de bienes de equipo y en general de producción en las naciones de industrialización “más que tardía”; pero a la vez hace posible, *rentable*, un proceso de industrialización a partir del “techo” (los bienes de consumo), sin que el “piso” de la estructura industrial (el sector I), tenga que registrar un desarrollo simultáneo. El elemento mediador que hace posible que esta forma “internacionalizada” de la reproducción ampliada del capital se concrete en un proceso de crecimiento es, como se sabe, las *divisas* (en nuestro caso *dólares*), lo que a su vez hace de la capacidad para importar de la economía una relación de importancia estratégica para el ritmo y la continuidad del proceso de acumulación de capital.

A la vez, las mismas condiciones generales de atraso a partir de las que se da el proceso de industrialización, y en la medida en que este último está definido en sus parámetros básicos por los centros industriales avanzados, hacen de la participación *económica* del Estado una condición insalvable, tanto para el desarrollo de la industria en su conjunto, como para el mantenimiento del ritmo de crecimiento global de la economía. En efecto, el horizonte tecnológico que los capitalistas tienen frente a sí en estas naciones, determinado por el desarrollo industrial alcanzado en los centros, trae consigo de manera inflexible requerimientos en materia de insumos estratégicos e infraestructura básica que, habida cuenta del predominio de las relaciones de producción capitalistas, sólo pueden ser satisfechos poniéndose “por encima” de dichas relaciones y de los criterios que de ellas surgen en lo que toca a las decisiones de inversión. Toca entonces al Estado desarrollar aquellas empresas que, a pesar de su carácter estraté-

gico para el crecimiento capitalista, por su rentabilidad y requisitos de inversión están fuera de las preferencias del conjunto de los capitalistas, así como garantizar la construcción y expansión de lo que se ha dado en llamar la infraestructura económica y social del desarrollo.

La prioridad que tienen para el desarrollo capitalista en estas sociedades, la capacidad para importar y la del Estado para actuar directamente sobre el proceso económico, se refuerza en la medida en que el polo "dinámico" de la acumulación en la industria se desliza del sector productor de bienes ligeros de consumo "masivo" a los que producen bienes duraderos, "pesados", de consumo y bienes intermedios y de capital.

Por lo que toca al Estado, en particular, la socialización de la producción que generan el desarrollo y la diversificación industrial, al darse dentro de los marcos de una acelerada monopolización de la estructura industrial, determinan que su rol como eje de la reproducción ampliada del sistema se convierta en decisivo, no a largo plazo, sino en lo inmediato y ligado directamente al proceso productivo, tal y como sucede en los países capitalistas más desarrollados. Así, en estas condiciones, el Estado encara una doble, cada vez más acuciante, tarea: continuar apoyando la expansión de la infraestructura, el desarrollo de las ramas básicas y la diversificación del aparato productivo y, por otra parte, garantizar en medida creciente la realización de la plusvalía producida en condiciones marcadamente monopolísticas (oligopólicas).

La situación descrita en el párrafo anterior es, como se sabe, la que en la actualidad caracteriza a países como Brasil, Argentina y México, en los cuales, además, dado el grado de urbanización y diversificación social alcanzado, el Estado se ve cada vez más limitado para actuar en función exclusiva de los requerimientos directos de la acumulación de capital sin atender los renglones de gasto relacionados con el mantenimiento de la legitimidad política y la "armonía social" (los llamados gastos sociales).

En el caso de México, a partir del sexenio del presidente López Mateos, los incrementos en la capacidad para importar y en la de gasto del Estado tuvieron que ser coherentes con los objetivos centrales de la política de estabilización que en esos años se inició. Estos objetivos fueron, en lo fundamental, los siguientes:

- a) Incrementar el coeficiente de ahorro y la tasa de inversión,
- b) Reducir el crecimiento de los precios internos, y

- c) Mantener la paridad cambiaria y la libre convertibilidad del peso.

Estos objetivos, a su vez, eliminaban del horizonte de la política económica instrumentos como una política fiscal "agresiva" que, en virtud de los bajos niveles de ingreso de la población trabajadora, habría tenido que descansar en impuestos mayores a las ganancias de los capitalistas; el financiamiento de la actividad estatal con base en emisión monetaria y, por último, la devaluación del peso como vía para hacer más competitivas las exportaciones mexicanas.

De esta forma, la política de estabilización hizo descansar el ritmo de crecimiento de la economía en la entrada de capital externo, a través del cual fue posible concretar la acumulación industrial, sobre todo a partir de 1965 cuando las exportaciones disminuyeron su crecimiento y las entradas por concepto de turismo se vieron contrarrestadas en medida creciente por los gastos de los turistas mexicanos ricos en el exterior.

Asimismo, el gasto gubernamental, incluido el de las empresas estatales, tendió a financiarse cada vez en mayor monto a través del endeudamiento interno y externo, lo que permitió mantener una política de impuestos, precios y tarifas de franco "aliento" a la inversión privada y, junto a ello, un ritmo acelerado de gasto público sin recurrir al financiamiento inflacionario.

De esta forma, el desarrollo estabilizador de los años sesentas tuvo como contrapartida una creciente internacionalización de la economía mexicana, expresada en el predominio acentuado del capital extranjero en las ramas más dinámicas de la industria y en un endeudamiento público ascendente. Cubiertas así las condiciones *específicas* de la reproducción del capitalismo mexicano, el sistema de explotación construido a partir de fines de los años treinta se desplegó en un crecimiento acelerado de la economía, en una notable diversificación de la estructura productiva y en un elevado grado de estabilidad cambiaria y de los precios internos.

Veamos ahora, aunque sea esquemáticamente, las relaciones básicas que conforman el mencionado sistema de explotación:²

1. El sector agrícola, desdoblado en un polo diná-

² Para una discusión detallada, véase: Rolando Cordera, "Estado y Desarrollo en el Capitalismo Tardío y Subordinado", *Investigación Económica*, núm. 123, México, 1972; Guillermo Vitelli, "México: la Lógica del Capitalismo Dependiente" (mimeografiado), Santiago, 1972.

mico en el que están prácticamente generalizadas las relaciones de producción capitalista y en otro en donde predominan el minifundio y la pequeña explotación familiar, fue capaz de responder, en medida variable pero casi siempre positiva, a las exigencias del capitalismo industrial, aportándolas de divisas, materias primas, alimentos y mano de obra.

2. La provisión de alimentos y mano de obra por parte del campo, al combinarse con un estricto control sobre los trabajadores industriales a través de los sindicatos, hizo posible una administración salarial claramente favorable para el capital, al mantenerse un régimen de salarios bajos con un crecimiento real siempre inferior al de la productividad en la industria.

3. El dinamismo relativo de la oferta de alimentos agrícolas y el control sindical, constituyen uno de los pilares de la estabilidad interna de los precios, la cual, a su vez, permite a la gran empresa monopólica planear sus operaciones de largo plazo con un mayor grado de certidumbre. Además de los bajos salarios, la industria se vio favorecida por la política proteccionista que, sobre todo en el caso de la gran empresa, se tradujo en la obtención de superganancias.

4. La combinación salarios bajos-proteccionismo, fue aprovechada en medida más que proporcional por las grandes empresas oligopólicas en las que, gracias al uso de tecnología moderna, la productividad es sensiblemente mayor. La consecuente concentración de las ganancias sentó a su vez las bases para una expansión de la gran empresa y, también, para el mantenimiento de una elevada propensión a consumir por parte de los capitalistas, quienes consumen precisamente los bienes que produce la gran empresa monopólica. Esta última cuestión contó además con una política impositiva altamente funcional a la dinamización del consumo de las clases altas.

5. Las altas tasas de explotación y los crecientes volúmenes de ganancia, permitieron el surgimiento y la expansión relativa de un sector privilegiado de los grupos medios, cuyos niveles de empleo están determinados por el desarrollo de la propia gran empresa. Este sector se vio además engrosado por algunos estratos de la tecnoburocracia del Estado, dentro del cual se reproduce el perfil de la distribución del ingreso que se observa a nivel global.

Los ingresos relativamente altos de los mencionados sectores medios, permitieron la operación fluida de la ideología "consumista", producto de la internacionalización de las relaciones sociales capitalistas, ampliándose

de esta forma el mercado de consumo para los monopolios. Por su parte, el desarrollo explosivo del sistema financiero que se observa a partir de 1950 y su acentuada concentración, hicieron posible canalizar fondos de manera discriminada en favor de las empresas monopólicas y, junto a ello, financiar el consumo de bienes durables por parte de los referidos grupos medios.

6. La generalización de la ideología "consumista", sobre todo en las ciudades, afecta a los propios grupos explotados y da lugar a una brutal distorsión del gasto familiar proletario, que se expresa en la coexistencia de barracas, insalubridad y subalimentación con televisores y radios transistorizados.

7. El desarrollo del mercado de "élite", cuyo dinamismo contrasta con el de los llamados bienes-salario, hizo posible la generación de efectos "hacia atrás" que se concretaron en la expansión de algunas ramas productoras de bienes de producción estrechamente enlazadas a los sectores que producen bienes durables de consumo. Sin embargo, el desarrollo de algunas ramas del sector I, que en los años sesentas fue el más rápido, no dependió exclusivamente del crecimiento de la producción de bienes de consumo "para los capitalistas", como los llama Kalecki, sino también de los programas de obras del Estado y de la expansión de las empresas públicas, cuyos proveedores principales tendían a ser precisamente las grandes empresas monopólicas privadas. En cualquier caso, el resultado es la diversificación de la estructura industrial, una mayor división del trabajo y, en consecuencia, la ampliación del mercado, sin que en este último proceso "cuenta" de manera relevante el crecimiento de los ingresos de los asalariados.

8. En suma, el desarrollo del capitalismo industrial en México, como sucede en términos generales en Brasil y Argentina, al tener lugar en un contexto internacional dominado por el capital monopólico y en una época de cambio tecnológico acelerado, depende, desde el lado de la demanda, de la profundización de un tipo específico de mercado constituido en lo fundamental por las ganancias de los capitalistas, los ingresos de las capas medias privilegiadas y el gasto gubernamental; y por el lado de la oferta, de la capacidad con que cuenta la economía para incorporar dinámicamente, a través de las divisas, los medios de producción y la tecnología necesarios para concretar el proceso de acumulación en el sector industrial y en particular en las ramas de "punta".

La continuidad del proceso, tal y como lo muestra la experiencia mexicana de los últimos veinte años,

tiene su base en el mantenimiento de un régimen de salarios excesivamente bajos, gracias a lo cual pudo mantenerse un nivel relativamente alto de consumo por parte de los sectores medios y los capitalistas, sin afectar de manera sustancial la acumulación.

Por otro lado, el proceso de diversificación global del mercado de élite impone no sólo un cierto nivel del gasto público como componente de la demanda, sino también un gasto gubernamental orientado a la modernización y expansión permanentes de la infraestructura económica y social, incluyendo en este concepto las comunicaciones de todo tipo, la producción de insumos estratégicos de uso difundido, la educación, etcétera, tareas que obviamente constituyen fuentes adicionales de presión sobre las finanzas públicas.

III

Al concluir la década pasada el "mundo feliz" del desarrollo mexicano empezó a dar muestras cada vez más evidentes de agotamiento.

La asignación de los recursos públicos, al discriminar sistemáticamente los renglones de bienestar social y aquellos relacionados con las zonas rurales donde predominan el minifundio y la agricultura de temporal, en beneficio de la agricultura de exportación y del desarrollo capitalista en la industria, no hizo más que profundizar el desarrollo desigual entre sectores y regiones y coadyuvar directamente a que se agudizara la concentración económica y social.

Así, el rápido crecimiento industrial de México tiene lugar en un marco urbano caracterizado, de una parte, por la concentración de la opulencia "neocapitalista" y, de otra, por el incremento geométrico del desempleo y formas de vida urbana que se han dado en llamar "marginales". La aceleración del desempleo y el subempleo que ha tenido lugar en los últimos años, por cierto, refleja de manera directa el papel predominante de la empresa monopólica en la economía industrial mexicana, dado que, al concentrar masas crecientes de plusvalía, aminorar la competencia entre los capitalistas y utilizar una tecnología ahorradora de mano de obra, refuerza las tendencias naturales del sistema a producir y reproducir ampliamente el ejército de desempleados.

Por su parte, la pobreza campesina tradicional, combinada con la erosión de las condiciones de producción en el sector minifundista, no sólo hizo renacer con nue-

vos bríos el descontento rural, sino también puso en peligro la provisión adecuada (en términos de la demanda solvente) de alimentos agrícolas a las ciudades y, de este modo, el mantenimiento de los salarios bajos en la industria. Asimismo, la crisis rural se expresó en el éxodo masivo hacia las áreas urbanas, con el consiguiente reforzamiento de las tensiones sociales dentro de las ciudades medianas y grandes del país.

Paralelamente, la capacidad de la economía mexicana para captar divisas y la capacidad del Estado para gastar en concordancia con las exigencias del proceso de acumulación, enfrentaron, en los últimos años de la década pasada, limitaciones cada vez más agudas. A partir de 1965 las exportaciones de mercancías disminuyeron su ritmo de crecimiento y el peso del financiamiento externo del desarrollo, estratégico para la continuidad de la acumulación monopólica, tendió a recaer en medida creciente en la contratación de créditos internacionales y en la inversión extranjera directa. El Estado, por su parte, al mantener prácticamente inafectada su política impositiva de aliento inmediato a la formación de capital privado, aumentó su dependencia respecto de los créditos internos y externos hasta llegar a una deuda pública total superior a los 100 000 millones de pesos en 1970.

La falta de flexibilidad de las exportaciones y de los ingresos públicos convirtieron a la deuda externa y a la inversión extranjera directa en factores que en lo inmediato retroalimentaban los desequilibrios que originalmente estaban destinados a corregir. En efecto, los créditos y la inversión del exterior, a la vez que aportan recursos financieros y medios de producción por los que se concreta la acumulación industrial, implican compromisos más o menos fijos, por concepto de intereses, amortizaciones y utilidades en materia de pagos al exterior; esto incide sobre el equilibrio de la balanza de pagos y en particular sobre la cuenta corriente y, al perder dinamismo las exportaciones, amplía la magnitud del déficit. Del mismo modo, el endeudamiento público significa erogaciones posteriores no productivas, lo cual, frente al crecimiento reducido de los recursos propios del gobierno y de las empresas estatales, disminuye dinámicamente la capacidad de inversión y gasto del Estado, al menos por medios no inflacionarios.

Como hemos visto, la dinámica del sector externo y del Estado es esencial para garantizar la continuidad, no digamos la aceleración, del proceso de acumulación de capital en una economía como la mexicana. En estas condiciones, la perspectiva que se vislumbraba

a fines de los años sesenta era la de un descenso en el ritmo de la acumulación que indefectiblemente pondría en juego las tendencias siempre presentes a una crisis de realización. En este contexto, el crítico universo social al que aludimos, podría desplegarse no sólo en conflictos sociales y políticos agudos, sino de hecho en una crisis global dentro de la que las contradicciones específicas de los distintos niveles tenderían a reforzarse unos a otros.

Los aspectos centrales del programa económico del actual gobierno pretenden responder, más que a puntos específicos de la problemática económica del presente, a la mencionada perspectiva de una crisis global y profunda. Al convertir a la "modernización" del aparato productivo y del Estado en sus divisas fundamentales, el gobierno condensa las necesidades centrales que hoy encara la continuidad del proceso de acumulación industrial: *divisas y recursos públicos*. Con ellos, se piensa, se estaría en posibilidad de expandir la gran empresa, ampliar la división del trabajo, incrementar el empleo para los grupos medios y, así, profundizar el mercado de consumo de bienes durables. Paralelamente, una mayor disponibilidad de recursos financieros y de divisas capacitaría al Estado para emprender el desarrollo de nuevas ramas productoras de insumos necesarios para la industria monopólica, enfrentar los problemas urbanos más explosivos y atender las zonas agrícolas más deprimidas en las que, como se ha dicho, tiene su origen el componente fundamental del valor del grueso de la fuerza de trabajo industrial: los alimentos agrícolas.

Esta última cuestión, por cierto, adquiere en el presente una importancia singular debido a, por lo menos, dos razones. Por un lado, como ya se dijo, la agricultura que produce para el mercado interno parece estar enfrentando los límites de sus posibilidades dinámicas como consecuencia de la política agrícola seguida en los últimos veinte años y, también, de la propia forma en que la explotación de la tierra está organizada en este sector. Por otro, el mantenimiento y, desde luego, la ampliación del consumo de durables por las capas medias exige una contención relativa, pero permanente, de los salarios industriales, en particular si se trata de iniciar una nueva etapa de expansión que implica, en sus inicios, una acumulación de capital "más que proporcional". Esto, como es claro, no puede garantizarse por la simple operación de los métodos de control sindical, si la base material de este control, los alimentos baratos, mantiene el ritmo de erosión de los últimos

años. Es desde esta perspectiva que los intentos de organización colectiva de los productores agrícolas anunciados por la actual administración, más que aparecer como contradictorios al desarrollo del sistema se presentan como funcionales a los intereses del capital monopolístico.

Los intentos gubernamentales por encontrar un lugar de significación en el concierto tercermundista, vigorizado por el desarrollo de la crisis internacional, se ubican, aunque pudiera parecer paradójico, dentro de la misma perspectiva estratégica. En efecto, la exportación de bienes industriales requiere, como es obvio, de la apertura de nuevos mercados que permitan no sólo la ampliación del mercado externo para México, sino también un mayor grado de flexibilidad en materia exportadora. Por otra parte, la estrategia de exportación de un país como México implica necesariamente la participación activa de la gran empresa internacional, lo cual, también de manera natural, tiende a afectar las relaciones internas de poder y cuestiona el régimen de dependencia "negociada", puesto en práctica a partir de los años cincuenta. Para garantizar el mantenimiento de este tipo de asociación con el capital imperialista y, desde luego, para alterarlo en contra de ese capital, el Estado tiene que fortalecerse en lo interno, tanto política como financieramente, y, a la vez, construir un sistema de alianzas internacionales que permitan a la gran burguesía mexicana y al Estado mismo negociar, desde una posición lo más ventajosa posible, los términos de la nueva asociación. Nacionalismo e internacionalización económica aparecen aquí como términos complementarios, más que excluyentes.

El proyecto, desde luego, no está libre de contradicciones que, en su desarrollo, lo pueden llevar a disolverse en un periodo de inestabilidad y recesión económica y social.

La modernización estatal mencionada, por ejemplo, al implicar una revisión de fondo de la política impositiva y de precios de las empresas públicas, tiende a afectar en mayor medida a la pequeña y mediana empresa "tradicional", que es la más ineficiente. Ello, aparte de sus repercusiones en el nivel de precios —primera línea de defensa del capital—, puede agudizar el desempleo, tanto por la modernización a que se ven obligadas algunas de estas empresas, como por la quiebra de otras, y, a otro nivel, pone en peligro la unidad del "bloque de propietarios" en el que se ha sustentado la célebre estabilidad política mexicana.

Del mismo modo, la introducción de medidas ra-

cionalizadoras en los centros de decisión estatales pone en cuestión el *status* de algunos sectores burocráticos y, consecuentemente, introduce tensiones adicionales dentro del propio aparato estatal.

Por su parte, la "apuesta" tercermundista del nuevo gobierno, destinada, además de lo asentado, a vigorizar el control ideológico sobre las masas, deteriorado a fines de la década pasada, altera la confianza de algunos sectores de la burguesía internacional, lo cual se traduce en restricciones relativas de la inversión foránea y, en lo interno, al intentar concretarse en algunas reformas limitadas, refuerza la paranoia "antiestatista" de la pequeña y la mediana empresa, hoy crecientemente acosada por el proceso de monopolización que la política modernizadora tiende a acelerar.

Así, es el conjunto del bloque dominante, tal y como hasta ahora se ha estructurado, el que de una manera inmediata resiente los efectos de una política que, con ironía, se destina precisamente a garantizar la continuidad del sistema social capitalista.

De aquí que no resulte, en lo absoluto, sorprendente que la escena política del presente haya estado fuertemente determinada y protagonizada por fuerzas y grupos sociales que en lo esencial se ubican en el interior del sistema de alianzas de las clases y fracciones propietarias. Con independencia de los deseos y los temores de los actores directos del drama actual, son las propias contradicciones del desarrollo capitalista de México las que de una manera objetiva exigen, para que el sistema se mantenga en expansión, una redefinición profunda del propio bloque dominante.

Por supuesto, al calor de la misma crisis la dinámica de los conflictos "arriba" se verá condicionada, en un sentido u otro, por la dirección y la magnitud que las fuerzas sociales del bloque dominado le impriman al enfrentamiento clasista fundamental, él mismo agudizado en la medida en que los efectos de la crisis se profundicen y afecten a sectores sociales cada vez más amplios.